

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

AUTO No. 066.

MAGISTRADO PONENTE: ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES

ACCIÓN:	POPULAR
EXPEDIENTE:	76147-33-33-003-2022-00628-01 El expediente se encuentra digital en Samai y en SharePoint.
DEMANDANTE:	Alba Nelly Montoya Mejía <a href="mailto:Carito_sandovalm@hotmail.com">Carito_sandovalm@hotmail.com</a> Celular 321-5455433
DEMANDADO:	Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres <a href="mailto:contactenos@gestiondelriesgo.gov.co">contactenos@gestiondelriesgo.gov.co</a> Municipio de Cartago- Oficina de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres Cartago <a href="mailto:notificacionesjudiciales@cartago.gov.co">notificacionesjudiciales@cartago.gov.co</a>
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO – MEDIDA CAUTELAR

OBJETO DE LA DECISIÓN

Se resuelve el recurso de apelación propuesto por la parte demandada contra el auto interlocutorio del **22 de agosto de 2022** proferido por el Juzgado Tercero Administrativo de Cartago, que decretó una medida cautelar.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

La señora Alba Nelly Montoya Mejía, en nombre de la comunidad de la urbanización “Fresneda etapa I”, demandó al municipio de Cartago- Oficina de Gestión de Riesgo, para obtener la protección de los derechos colectivos comprometidos por un deslizamiento de tierra y mal estado del terreno que colinda con las casas.

El **9 de agosto de 2022** se admitió la demanda y se vinculó a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres.

El **7 de septiembre de 2022** el juzgado resolvió el recurso de reposición que interpuso la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres para controvertir la competencia para conocer el asunto siendo ella una entidad del orden nacional. Dijo que el libelo inicial se dirigió contra entidades de orden local, esto es, el Municipio de Cartago y la Oficina de Riesgo y Atención de Desastres, por lo tanto, es un asunto de su competencia, lo cual no varía por la vinculación de oficio a la Unidad Nacional para la Gestión de Desastres.

El **9 de agosto de 2022** el juzgado tomó las siguientes medidas como juez director del proceso: a) ordenó al alcalde de Cartago y al jefe de la Oficina de Gestión de Riesgos y Atención de Desastres del Municipio emitir un informe sobre el estado de la urbanización “Fresneda etapa I”; b) ordenó al director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres informar si se reportó el área de la acción popular como una zona de riesgo de desastre.

## 2. La providencia apelada.

Ante el silencio de las entidades, el **22 de agosto de 2022** el juzgado dispuso:

1. Decretar la medida cautelar, conforme a las consideraciones expuestas.
2. Como consecuencia de lo anterior, se ordena al municipio de Cartago y a la Oficina de Gestión de Riesgo y Atención de Desastres del municipio, que a través del funcionario correspondiente, dentro del término de tres (3) días **efectúe visita** a la urbanización “Fresneda etapa I” y especialmente a las viviendas ubicadas en la calle 2ª, entre las carreras 24 y 25 con las siguientes nomenclaturas: 24-03, 24-09, 24-15, 24-21, 24-27, 24-33, 24-39, 24-45 y 24-51 de dicha urbanización, para que realicen **informe diagnóstico** de la problemática que allí se presenta, plantee las posibles soluciones y/o medidas de contingencias, el cual en un plazo máximo de dos (2) días después de finalizar la visita de inspección del terreno, deberá presentar dicho documento al Alcalde de Cartago, a quien por su parte se le otorgará un término adicional de cinco (5) días después de su recepción para que efectúe un plan de acción de la intervención que realizará con el fin de cesar los riesgos que padece dicha comunidad y en un plazo máximo de quince (15) días inicie los trámites administrativos, presupuestales y contractuales a que haya lugar; de lo cual deberá informar a este Despacho e igualmente al actor popular y demás partes.

Expuso que con la demanda se aportaron 24 archivos que contienen fotografías y videos de la zona afectada, con las cuales se puede advertir el riesgo inminente de ocurrencia de un perjuicio irremediable frente a los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

## 3. Los fundamentos del recurso.

El apoderado judicial del Municipio de Cartago apeló. Argumentó que el terreno contiguo a la urbanización es de su propiedad, empero, no es cierto el hecho de que desde el año 2008 se viene presentando la situación alegada con el talud, pues fue en el año 2021 que se presentó el deslizamiento y como consecuencia se realizaron las obras de mitigación. Dijo que los habitantes del sector no se encuentran en peligro inminente.

Afirmó que en el deslizamiento del año 2021 solo resultaron afectadas dos viviendas por el taponamiento con escombros en la parte central del canal superior de desagüe del talud, lo que produjo que después de un fuerte aguacero, las aguas se represaran en la zona central de la ladera y buscaran salida hacia el nivel inferior arrastrando consigo gran cantidad de material que terminó contra la pared posterior de las viviendas del barrio la Fresneda 1 etapa.

Informó que una vez evidenciada la causa del deslizamiento, se tomaron las siguientes acciones: i) remoción de los escombros y basuras que permanecían en el canal de desagüe y manejo de la escorrentía de aguas lluvias, 2) limpieza de los canales de drenaje superiores, laterales y bajos que rodean la ladera, para que las aguas lluvias fueran conducidas hasta el alcantarillado municipal, 3) remoción controlada y de forma manual de salientes del barranco, 4) Retiro de la tierra que afectó las viviendas, 5) erradicación de un árbol que, después del deslizamiento, quedó con las raíces expuestas y 6) reconstrucción de los muros posteriores de las casas, entre otras medidas.

Informó que sobre los hechos acaecidos en el barrio la Fresneda etapa I, se presentó una acción de tutela donde se cuestionó a la oficina de Gestión de Riesgo y desastre Municipal de no haber tomado las acciones para mitigar el riesgo ante el deslizamiento.

En dicha oportunidad, también fue parte la demandante en el presente asunto.

Concluyó que el Municipio de Cartago tomó las medidas preventivas y realizó a la comunidad del sector unas recomendaciones ambientales para que las cunetas de aguas permanecieran en buen estado.

Informó que la oficina de Gestión de Riesgos y Atención de Desastres del Municipio de Cartago ha realizado constantes visitas y monitoreos al talud y cunetas para verificar que estén libres de basura y escombros que obstaculicen el libre tránsito de las aguas lluvias. También dijo que en la actualidad se han realizado unas obras civiles que garantizan que no existe un peligro inminente que ponga en riesgo la integridad física de los habitantes del sector.

## **CONSIDERACIONES.**

### **4. Competencia.**

De conformidad con el numeral 2 del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 es apelable el auto que decreta una medida cautelar y conocerá el superior funcional.

### **5. Problema jurídico.**

¿Se acreditó un daño inminente a los derechos colectivos identificados de la comunidad demandante que amerite adoptar las medidas cautelares de visita, informe diagnóstico y plan de acción, como ordenó el juzgado, para evitar la concreción de un riesgo previsible?

### **6. Tesis del despacho.**

El Despacho confirmará el auto apelado porque se adoptaron medidas adecuadas, necesarias e idóneas para evitar la concreción de un riesgo técnicamente previsible pues existe evidencia del derrumbe acaecido en el barrio Fresneda etapa I, donde se vieron afectadas las viviendas ubicadas en la calle 2ª, entre las carreras 24 y 25 con las siguientes nomenclaturas: 24-03, 24-09, 24-15, 24-21, 24-27, 24-33, 24-39, 24-45 y 24-51, y además, el Municipio de Cartago a través de la Oficina de Gestión de Riesgo y Atención de Desastres del Municipio no allegó prueba que demuestre que recientemente se han hecho labores de seguimiento y mantenimiento de los canales que se encuentran en el talud.

### **7. Marco normativo aplicable.**

La medida cautelar es un mecanismo procesal que tiene por finalidad brindar protección anticipada del derecho invocado por el actor cuando el juez encuentre que existe apariencia de buen derecho, esto es, que sus razones para demandar cuentan con bases sólidas en el marco normativo y fáctico del caso y el transcurso del juicio implique un detrimento de ese derecho que deba ser prevenido y conjurado para que el fallo estimatorio no sea ineficaz.

En cuanto a las medidas cautelares al interior de las acciones populares, el artículo 25 de Ley 472 de 1998, dispone:

**“Artículo 25. Medidas cautelares.** Antes de ser notificada la demanda y en cualquier estado del proceso podrá el juez, de oficio o a petición de parte, decretar, debidamente motivadas, las medidas previas que estime pertinentes para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado. En particular, podrá decretar las siguientes:  
a) Ordenar la inmediata cesación de las actividades que puedan originar el daño, que lo hayan causado o lo sigan ocasionando;

- b) Ordenar que se ejecuten los actos necesarios, cuando la conducta potencialmente perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del demandado;
- c) Obligar al demandado a prestar caución para garantizar el cumplimiento de cualquiera de las anteriores medidas previas;
- d) Ordenar con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las medidas urgentes a tomar para mitigarlo.

**PARAGRAFO 1o.** El decreto y práctica de las medidas previas no suspenderá el curso del proceso.

**PARAGRAFO 2o.** Cuando se trate de una amenaza por razón de una omisión atribuida a una autoridad o persona particular, el juez deberá ordenar el cumplimiento inmediato de la acción que fuere necesaria, para lo cual otorgará un término perentorio. Si el peligro es inminente podrá ordenar que el acto, la obra o la acción la ejecute el actor o la comunidad amenazada, a costa del demandado.”

Por su parte, el artículo 26 ibídem, consagra admisible la oposición a las medidas previas con base en estos argumentos:

“(…)

- a) Evitar mayores perjuicios al derecho o interés colectivo que se pretende proteger;
- b) Evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público;
- c) Evitar al demandado perjuicios cuya gravedad sea tal que le haga prácticamente imposible cumplir un eventual fallo desfavorable.
- d) Corresponde a quien alegue estas causales demostrarlas (…)

A su turno la Ley 1437 de 2011 en su artículo 229 contempla:

**“Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares.** En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.

La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.

**PARÁGRAFO.** <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos ~~y en los procesos de tutela~~ del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.”

El Consejo de Estado<sup>1</sup> manifestó “que ambas disposiciones deben ser interpretadas de manera armónica”, máxime al encontrarse que “la Ley 472 resulta ser más garantista que lo dispuesto en el Capítulo XI del CPACA”.

En todo caso, jurisprudencialmente el Consejo de Estado<sup>2</sup> ha señalado que el decreto de una medida previa en un juicio de acción popular está sujeto a los siguientes presupuestos de procedencia, a saber:

**“a) Que esté debidamente demostrado en el proceso la inminencia de un daño a los derechos colectivos o que el mismo se haya producido**, esto con el fin de justificar la imposición de la medida cautelar, el cual es prevenir aquel daño que está por producirse o a hacer cesar aquel que ya se consumó;

<sup>1</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 26 de abril de 2013, expediente nro. 2012-00614.

<sup>2</sup> Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 19 de mayo de 2016. Radicación número: 73001-23-31-000-2011-00611-01(AP)A.

- b) Que la decisión del juez al decretar la medida cautelar esté plenamente motivada;**  
y  
**c) Que para adoptar esa decisión, el juez tenga en cuenta los argumentos contenidos en la petición que eleve el demandante, para que se decrete tal medida, lo cual, lógicamente, no obsta para que el juez oficiosamente, con arreglo a los elementos de juicio que militen en la actuación, llegue al convencimiento de la necesidad de decretar una medida cautelar y proceda en tal sentido”.** (negrillas texto original).

## **8. El derecho colectivo amenazado.**

En el presente proceso están comprometidos los siguientes derechos: i) a la vivienda digna, ii) al goce de un ambiente sano, iii) a la propiedad, iv) a la vida, y v) a la integridad personal. El juzgado vinculó la acción al derecho colectivo a la prevención de riesgos técnicamente previsibles, contenido en el literal l) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

Sobre la prevención de desastres y la participación de las entidades territoriales, el Consejo de Estado<sup>3</sup> ha dicho lo siguiente:

En tal contexto, la Ley 1523 de 2012<sup>4</sup> adoptó la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y definió la gestión del riesgo de desastres como *“un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.”* Asimismo, dispuso que era una política de desarrollo indispensable para asegurar, entre otros, la seguridad territorial y los derechos e intereses colectivos de las poblaciones y las comunidades en riesgo, razón por la que debe estar intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población.<sup>5</sup>

Como responsables de la gestión del riesgo, la Ley 1523 de 2012 señaló a todas las autoridades y habitantes del territorio. Así, asignó a las entidades públicas, privadas y comunitarias el desarrollo y ejecución de los procesos de gestión del riesgo que comprenden conocimiento y reducción del mismo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

En relación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el artículo 5° *ídem* dispuso que era el conjunto de entidades públicas, privadas, de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el País.

En cuanto a su organización, el Sistema de Gestión del Riesgo a nivel nacional está dirigido por el presidente de la República, el Director de la Unidad Nacional

<sup>3</sup> SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, sentencia del 14 de octubre de 2021. Radicación número: 13001-33-33-004-2015-00164-01(AP).

<sup>4</sup> Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.

<sup>5</sup> Ley 1523 de 2012. Artículo 1° así como el artículo 11.

para la Gestión del Riesgo y los Gobernadores y Alcaldes en sus respectivas jurisdicciones.<sup>6</sup>

Por su parte, el artículo 12 integró a los gobernadores y alcaldes como conductores del sistema nacional en el respectivo nivel territorial facultándolos para adoptar las medidas necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción.

***“Artículo 12. Los Gobernadores y Alcaldes. Son conductores del sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción.”***

**En ese sentido, los alcaldes, como conductores del desarrollo local, son los responsables directos de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio**, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción en su territorio, y deberán integrar en la planificación del desarrollo local acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública, como lo ordena el artículo 14 *ibídem*.

Aunado a esto, los artículos 39 y 40 consagraron de manera expresa la obligación de incorporar como un elemento de planificación y ordenamiento territorial las directrices que sobre gestión del riesgo se estimen pertinentes para dar cumplimiento a los mandatos de la Ley.

***“Artículo 39. Integración de la gestión del riesgo en la planificación territorial y del desarrollo. Los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas hidrográficas y de planificación del desarrollo en los diferentes niveles de gobierno, deberán integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y, considerar, el riesgo de desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo.***

***Artículo 40. Incorporación de la gestión del riesgo en la planificación. Los distritos, áreas metropolitanas y municipios en un plazo no mayor a un (1) año, posterior a la fecha en que se sancione la presente ley, deberán incorporar en sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del riesgo, y por consiguiente, los programas y proyectos prioritarios para estos fines, de conformidad con los principios de la presente ley.***

*En particular, incluirán las previsiones de la Ley 9ª de 1989 y de la Ley 388 de 1997, o normas que la sustituyan, tales como los mecanismos para el inventario de asentamientos en riesgo, señalamiento, delimitación y tratamiento de las zonas expuestas a amenaza derivada de fenómenos naturales, socio naturales o antropogénicas no intencionales, incluidos los mecanismos de reubicación de asentamientos; la transformación del uso asignado a tales zonas para evitar reasentamientos en alto riesgo; la constitución de reservas de tierras para hacer posible tales reasentamientos y la utilización de los instrumentos jurídicos de adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios para reubicación de poblaciones en alto riesgo, entre otros.”*

---

<sup>6</sup> Ley 1523 de 2012. Artículo 9.

Así las cosas, es claro que la Ley 1523 de 2012 asignó expresas obligaciones a los alcaldes sobre la implementación de los procesos de gestión del riesgo en su territorio, lo que supone que también compete a ellos ejecutar las acciones dirigidas al conocimiento y mitigación del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción; conforme a ello, la Sala no comparte la afirmación del apoderado del Municipio de Turbaco, sobre la ausencia de responsabilidad en la vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, toda vez que, de acuerdo con el recuento normativo visto, es a ese ente territorial, a través de su alcalde, a quien corresponde, en el marco del Sistema Nacional de Riesgo, adoptar las medidas que resulten necesarias para atener las condiciones de riesgos derivadas de las características geológicas del sector Las Tres Marías, las cuales se agravan como consecuencia de las precipitaciones que se presentan en ese lugar.

## 9. Premisas fácticas.

Obran en el expediente elementos probatorios relevantes sobre los siguientes hechos:

**El 26 de junio de 2021** el Municipio de Cartago, a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo, recomendó la evacuación de nueve viviendas del barrio la Fresneda Etapa I – Manzana D, por posible alud de tierra.

**El 26 de junio de 2021** el representante del cuerpo de bomberos voluntarios del Municipio de Cartago certificó que en esa misma fecha se informó sobre el deslizamiento acaecido en el barrio Fresneda. Dijo: *“se puede observar que un barranco se deslizó hacia el hogar y tumba la pared del cuarto trasero, tapando parcialmente a las dos personas que se encontraban en ese cuarto, se procede al rescate de las dos personas, haciendo remoción de la tierra y escombros hasta poder liberarlas, ambos lesionados fueron trasladados en ambulancia al centro asistencial.”*

**El 6 de julio de 2021** el Municipio de Cartago presentó ante la CVC una solicitud para erradicar un árbol de especie Samán ubicado en el barrio La Fresneda 1.

**El 7 de julio de 2021** la CVC suscribió el oficio nro. 0771-64032021, por medio del cual, evidenció que el árbol de especie Samán representaba un riesgo para la comunidad del barrio Fresneda 1 y por ello, autorizó al Municipio de Cartago su erradicación.

**El 09 de julio de 2021** el asesor de la Oficina para la Gestión del Riesgo informó las actividades desarrolladas con ocasión del siniestro acaecido el 26 de junio de 2021 y comentó que realizó una vista de inspección preliminar del talud donde se ocasionó la remoción en masa, y verificó el estado de las nueve viviendas que colindan con la ladera. Advirtió que la *“concentración de escorrentía, se debió a la obstrucción de la zanja de drenaje ubicada en la parte media alta del talud; justo donde se obstruyó la zanja, se generó el desbordamiento de agua y la afectación del talud”*.

Adicionalmente dijo:

Los vecinos del sector relataron que esta zanja es obstruida por personas que depositan basura y sobrantes de construcción sobre esta.

Se evidenció por igual la inestabilidad y probable caída de un árbol de especie Samán, ubicado justo donde se inició el deslizamiento del talud, lo que generó que quedar expuesta su raíz.

Así mismo se realizó una inspección al interior de las casas más afectadas por

el deslizamiento de tierra.

Como resultado de la visita de inspección, los ingenieros Carlos Villamil funcionario de la CVC y Cesar Vega Coordinador del CMGRD, consideran que la solución mas viable técnicamente es la construcción de una cuneta de drenaje que permita la evacuación de las aguas fuera del cuerpo de talud, igualmente es necesario el mejoramiento de la pendiente del talud con la implementación de terrazas y su protección a través de la revegetación. Igualmente es latente la necesidad de erradicar el árbol de la especie Samán, ubicado en la parte afectada del talud, el cual puede genera presión a la ladera.

Por su parte el Secretario de Gobierno Municipal “(...)”, funcionario de la Secretaría Jurídica del Municipio; consideran necesario la evacuación temporal de los habitantes de las casas amenazadas, igualmente, la adopción de medidas policivas a través de la inspección de policía, para evitar que se arrojen basuras y escombros a las obras de drenaje, lo cual ocasiona su obstrucción y los posteriores deslizamiento y daños.

Ante lo expuesto anteriormente, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD, recomendó:

- 1.La evacuación de los habitantes de las casas en amenaza, proporcionándoles un subsidio de arrendamiento por un plazo máximo de 3 meses mientras se ejecutan las obras de mitigación.
- 2.La ejecución de las obras necesarias para la atención y reparación de los daños generados por la remoción de masa y las demás obras que puedan ser necesarias en la mitigación del riesgo, a posterioridad.

El **19 de julio de 2021** el personero municipal de Cartago respondió la petición verbal de la señora Alba Nelly Montoya sobre la adopción de medidas de prevención por los hechos acaecidos el 26 de junio de 2021. Indicó no ser el competente para dar solución a la problemática.

Mediante oficio del **27 de julio de 2021** la Alcaldía Municipal de Cartago le informó a la señora Alba Nelly Montoya Mejía que la CVC autorizó la erradicación del árbol samán que representaba un riesgo para la comunidad; y se estaba a la espera de que los vecinos del sector permitieran el retiro de la tierra.

El **27 de agosto de 2021**, el asesor de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Cartago informó a la abogada Martha Isabel Victoria Ocampo lo siguiente:

- 1) La tierra que se encontraba ejerciendo presión sobre los muros posteriores de las viviendas ya fue retirada en su totalidad y para ello, se rompió la pared de la residencia de la señora Alba Nelly Montoya Mejía, para retirar la tierra que estaba acumulada sobre los muros de los patios.
- 2) Explicó que la ladera tiene como sistema de esorrentía una canal a lo largo de la parte superior de esta, la cual conduce las aguas por la parte lateral de la colina hasta llevarlas a los canales inferiores que desaguan en el sistema público de alcantarillado. Informó que lo sucedido el 26 de junio de 2021 “se debió a que el canal superior se encontraba taponada con basuras y escombros que al parecer depositan allí vecinos del sector, entonces el agua buscó salida por el centro del barranco “lavando” la tierra de la ladera, con el resultado ya conocido”.

Dijo que como labores preventivas se han erradicado árboles que amenazaban las viviendas, se realizó la remoción de tierra, rocas y se realizó el mantenimiento y limpieza del canal superior e inferior.



- 3) Informó que ya se mitigó la amenaza de deslizamiento, por lo que, ya no se requería el desalojo de las familias y tampoco el subsidio de arriendo.

**El 8 de septiembre de 2021** el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo del Municipio de Cartago realizó los estudios previos para el proceso de selección de mínima cuantía para la ejecución de un contrato de obra para atender, mitigar y reparar los daños generados por las emergencias causadas por eventos naturales en unas zonas urbanas y rurales del municipio. El contrato fue adjudicado y su vigencia era hasta el 15 de diciembre de 2021. Se ejecutaron las siguientes labores: Revegetación del talud, a través de la siembra de plantas vetiver, se evacuó la totalidad del material inestable y el escombros producto del deslizamiento, se retiró el material depositado sobre las viviendas, producto del deslizamiento y trarraceo del material inestable, se reconstruyó el muro confinado en ladrillo farol de las viviendas afectadas con el deslizamiento.

## **10. Análisis del caso.**

La demandante alega que el estado del talud del terreno propiedad del Municipio de Cartago mantiene en riesgo las viviendas identificadas con las siguientes nomenclaturas 24-03, 24-09, 24-15, 24-21, 24-27, 24-33, 24-39, 24-45 y 24-51.

Afirma que el 6 de enero de 2022 se produjo una fuerte lluvia y la tierra volvió a ceder y varias habitaciones que colindan se inundaron y se llamó a los bomberos.

Dijo que los trabajos realizados por el Municipio de Cartago no mitigaron la amenaza y, en consecuencia, la comunidad ha tenido que remover varias toneladas de tierra poniendo en peligro sus vidas, al no tener el apoyo de las entidades encargadas de dicha gestión, quienes, además, no volvieron a realizar visitas de control.

El juzgado pidió informes actualizados pero no los recibió. Por el contrario, con base en el material probatorio allegado con la demanda, esto es, fotografías y videos de la zona afectada, coligió probado el riesgo inminente de ocurrencia de un perjuicio irremediable para los derechos colectivos a la seguridad, especialmente la prevención de desastres previsibles técnicamente.

El municipio, con la impugnación confirmó que en año 2021 se produjo un derrumbe de tierra que afectó a algunos habitantes del barrio Fresneda, esgrimió que la causa del desprendimiento de la tierra fue la obstrucción del canal de drenaje de aguas lluvias ubicado en la parte superior del talud que generó el desbordamiento, y manifestó que realizó acciones para mitigar el daño.

Sin embargo, no allegó documentos que demuestren que en el transcurso del presente año realizó actividades de prevención, por ejemplo, la limpieza del canal de aguas que se encuentra en el talud contiguo al barrio objeto de la presente acción popular, con el fin de determinar que no existe amenaza.

Por tanto, es imperioso que desde esta primera etapa procesal se realice la visita técnica y se rinda el informe solicitado, para identificar las condiciones de riesgo en la actualidad.

La secuencia fáctica expuesta permite determinar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida adoptada por el juzgado y por ello se impone confirmar el auto.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión,


## RESUELVE

**PRIMERO: CONFIRMAR** el auto interlocutorio del **22 de agosto de 2022** proferido por el Juzgado Tercero Administrativo de Cartago, que decretó una medida cautelar, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGÚNDO:** Notificar esta providencia y comunicar al juzgado lo decidido, así como el expediente electrónico.

La decisión adoptada en la presente providencia fue discutida y aprobada en Sala Virtual de la fecha, según consta en acta de que se entrega a la Secretaría de la Corporación por medios virtuales, atendiendo las circunstancias de salubridad públicas que se presenta en el país a raíz del COVID- 19.

## NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE



**ZORANNY CASTILLO OTALORA**  
Magistrada



**VICTOR ADOLFO HERNANDEZ DIAZ**  
Magistrado



**ANA MARGOTH CHAMORRO BENAIDES**  
Magistrada